

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha : 19/mar./2020

Página

1

CORPORACION

GRUPO HABEAS CORPUS-BTA

JUZGADOS DEL CIRCUITO DE BOGOTA

CD. DESP

SECUENCIA:

FECHA DE REPARTO

REPARTIDO AL DESPACHO

060

415

19/03/2020 12:59:41p. m.

JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD BTA

IDENTIFICACION

NOMBRE

APELLIDO

SUJETO PROCESAL

15961705

ADOLFO GIOVANNY

CASTRILLON MURILLO

01

52179064

CLAUDIA ANDREA

GONZALEZ FEO

03

אזהבנב ריהקה ת נרפ-קה ריי קהל

C01007HABV2

CUADERNOS 2

ricmarin

FOLIOS 9

EMPLEADO

OBSERVACIONES

RECLUIDO EN URI PUENTE ARANDA

Bogotá D.C., 19 de marzo de dos mil veinte (2020)

Señor

Juez CIRCUITO .

JUEZ DE PENAL MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL DE GARANTÍAS

E.

S.

D.

Ref.: **Acción de Habeas Corpus** iniciada a favor de **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO** contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio.

CLAUDIA ANDREA GONZALEZ FEO, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.179.064 de Bogotá, Abogada en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 218.243 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliada y residente en esta ciudad, por medio del presente escrito y haciendo uso del artículo 30 de la Carta Política, interpongo la acción de **habeas corpus**, en calidad de Apoderada del Señor **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, quien se encuentra recluso en las celdas de la Uri de Puente Aranda al momento de hacer efectiva la orden de captura del 13 de marzo del año que avanza, acción constitucional dirigida contra el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Villavicencio, de acuerdo a lo siguiente:

PRETENSIONES

Solicito señor Juez Constitucional, acoja la solicitud de mi Poderdante de habeas corpus, por la detención de manera ilegal y arbitraria acaecida el 13 de marzo de 2020 y como consecuencia restablezca de manera inmediata la libertad de **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, por pena cumplida dentro del proceso penal radicado No. 50001600056520141001200, seguido por el delito de tentativa de extorsión.

FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURÍDICOS

PRIMERO:

Que el 10 de mayo de 2014, le fue impuesta medida de aseguramiento a mi agenciado, por los delitos de tentativa de extorción, llevándose el rito normal del proceso penal, para lo cual culmino con sentencia condenatoria a 72 meses de prisión, emitida por el Juzgado 4 Penal Municipal Con Función de Conocimiento de Villavicencio. Decisión que fue recurrida ante el Honorable Tribunal Superior del Meta, quien modifico tal proveído, imponiendo una pena de 60 meses de prisión.

Es de aclarar que, a mi Poderante el 15 de agosto de 2017, le fue otorgado el beneficio de medida de aseguramiento no privativa de la libertad, para lo cual se le impuso el sometimiento de vigilancia electrónica, con presentaciones periódicas, suscribiendo actas de compromiso en el Juzgado de Salaminas - Caldas. También se fue solicitado la redención de pena, otorgándole por parte del juez executor 10 meses a favor de **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, quedando un total de 50 meses de prisión.

Que, dentro del proceso penal, en ningún momento se revocó el beneficio otorgado de medida de aseguramiento no privativa de la libertad y que además el juez executor concedió en su momento la libertad con mecanismo electrónico.

Ahora bien, bajo estas circunstancias, el pasado 13 de marzo de 2020, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión capturando así a **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, para que este cumpliera la pena impuesta dentro del proceso de tentativa de extorción, por lo que fue recluso en las instalaciones de la URI DE PUENTE ARANDA.

SEGUNDO:

Bajo esta comprensión debo indicar, que es procedente se ordene de manera inmediata la libertad de **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, porque ya cumplió con los 60 meses impuestos en sentencia de segunda instancia del 3 de agosto de 2017, por lo siguiente argumentos jurídicos:

1. Que, a hoy, momento en que se interpone el habeas corpus, han transcurrido 5 años, 10 meses y 8 días, los cuales se deben sumar de la siguiente manera:

- 10 de mayo de 2014 (se impone medida de aseguramiento) al 10 de mayo de 2015: **1 año**
- 10 de mayo de 2015 al 10 de mayo de 2016: **1 año**
- 10 de mayo de 2016 al 10 de mayo de 2017: **1 año**
- 10 de mayo de 2017 al 15 de agosto de 2017 (se concede la sustitución a vigilancia electrónica): **3 meses y 5 días**
- 15 de agosto de 2017 al 15 de agosto de 2018: **1 año**
- 15 de agosto de 2018 al 15 de agosto de 2019: **1 año**
- 15 de agosto de 2019 a hoy 18 de marzo de 2020 (momento de presentación del habeas corpus): **7 meses y 3 días**

Total: 5 años, 10 meses y 8 días

Que, teniendo en cuenta que la pena impuesta fue de 60 meses, bajo esta consideración **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO**, ya cumplió en su totalidad con los 60 meses de pena impuesta, el pasado 15 de mayo de 2019, permaneciendo en este momento de manera ilegal detenido, por cuanto, cumplió con lo

dispuesto por el operador judicial, circunstancia, que conlleva a la libertad absoluta, por cuanto hace 11 meses y tres días purgo con la pena impuesta.

Ahora bien, puede presentarse la siguiente circunstancia:

2. Que, el juez ejecutor, así como se dijo anteriormente, en otra oportunidad le concedió 11 meses y tres días de descuento de la pena a mi agenciado, por buen comportamiento, quedando una pena de 49 meses y 21 días de prisión, es decir, **4 años, y 45 días**.

De lo anterior, se refleja entonces que el derecho a la libertad, fue adquirida por **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO** el pasado **24 de junio de 2018**.

Es de resaltar, que tal descuento fue autorizado por el juez competente, por lo que se refleja, que se cumplió con la pena, impuesta de 60 meses de prisión, debido a que se purgo tal pena, con una no privativa de la libertad, que no fue revocada en ningún momento, por el juez ejecutor.

Es de resaltar, señor Juez, que **ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO** cumplió cada uno de las obligaciones impuestas, al momento de imponer la medida no privativa de la libertad, las cuales están señaladas en el artículo 307 literal b numerales 1,3,4,5,6 y 7. Además, nunca me fue solicitado revocatoria de la medida de aseguramiento por incumplir con alguna de estas cargas que me fueron impuestas y se dispusiera mi remisión a un centro carcelario.

3. Ahora bien, el artículo 1 de la Ley estatutaria 1095 de 2006, establece que el habeas corpus, es el mecanismo judicial mediante el cual se protege la libertad personal cuando ésta se restringe; i) con violación de las garantías constitucionales o legales ii) ésta se prolonga ilegalmente.

Así mismo, ha dispuesto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, que procede la garantía de la libertad en los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; **(2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos;** (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial¹.

4. Ahora bien, el evento numero dos descrito anteriormente, se enmarca en este asunto, debido a que, si bien es cierto, existo una sentencia condenatoria contra mi Prohijado Adolfo Giovanny Castrillon Murillo, con una pena de 60, la cual se le debe descontar los 11 meses y 21 días de redención por buen comportamiento, para un total de 49 meses y 21 días, los cuales se cumplieron el 24 de junio de 2018, es decir existe una prolongación ilegal de mi libertad.

Ahora bien, en gracia de discusión, sino se aceptase esa redención otorgada por el juez ejecutor, y se purgara los 60 meses, señalados en la providencia de segunda instancia, estos se hubieran cumplido el 15 de mayo de 2019, existió también una prolongación ilegal de mi libertad.

5. En efecto, el derecho a libertad personal está protegido en el artículo 30 de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 28 y 29 *ibídem*. Así, “*quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas*”, procedimiento que por su comprobada eficacia ha sido llamado en la jurisprudencia constitucional “*la acción de tutela de la libertad*”.

Este derecho al *habeas corpus* es uno de aquellos que según el artículo 85 de la Constitución Política tiene aplicación inmediata y, por lo tanto, no requiere de desarrollo legal ni de otro acto para efectos de su aplicación y garantía. Así mismo, el *habeas corpus* tiene una doble connotación pues es un derecho fundamental al tiempo que una acción para tutelar el derecho a la libertad personal; acción mediante la que se hace efectivo el derecho.

En este orden de ideas, está definido que la protección constitucional que brinda el recurso de *habeas corpus* procede: **i.)** cuando se aprehende a una persona en contravención con lo dispuesto en el artículo 28 superior o **ii.)** cuando la privación de la libertad, no obstante haberse ceñido a los estrictos lineamientos de la norma citada, es ilegal, arbitraria o se ha prolongado indebidamente, porque el derecho fundamental a la libertad es susceptible de limitación, “*pero sus restricciones deben observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consisten el derecho y los límites del mismo*”.

En consonancia con lo expuesto, la acción de *habeas corpus* puede promoverse: **i.)** ante cualquier autoridad judicial,

cuando la aprehensión se hubiere ordenado por fuera del proceso penal, para que cese inmediatamente la vulneración del derecho fundamental a la libertad del afectado y **ii.)** ante el juez de la causa, cuando la privación de la libertad no se justifica, o la definición de la causa se dilata injustificadamente, aunque la privación de la libertad se haya ordenado con las formalidades legales, y por motivo previamente definido en la ley.

Lo anterior sin perjuicio de que el derecho a la libertad también pueda ser invocado dentro del proceso penal, haciendo uso de los recursos previstos en el ordenamiento para controvertir las decisiones que comportan la restricción de tal derecho.

6. En efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que *“la persona que se encuentra privada de la libertad en legal forma, como consecuencia de la imposición de una medida de aseguramiento, debe controvertir la orden de privación de la libertad dentro del respectivo proceso penal (art. 415 CPP), en el cual se han dispuesto los recursos legales idóneos para revisar la decisión del funcionario judicial y evitar una eventual arbitrariedad.”*

No obstante, lo anterior, la Corte también ha señalado que, si el funcionario judicial omite o dilata el cumplimiento de su deber, la persona privada de la libertad puede, en forma excepcional, acudir a la acción de *habeas corpus* para que se tutele su derecho fundamental a la libertad personal (C.P., Art. 28), dado que se verifica la hipótesis de vencimiento de términos y el recurso ordinario dentro del proceso ha fallado. En consecuencia, la acción de tutela sólo podría proceder, en esos casos, como mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso material a la

administración de justicia (C.P., Arts. 23, 29 y 229) si el juez competente no resuelve oportunamente el *habeas corpus*.

Dentro de este contexto, debe recordarse que: **i.)** las actuaciones judiciales sin dilaciones integran el núcleo esencial del debido proceso; **ii.)** los términos procesales se deben observar con diligencia y **iii.)** la administración de justicia debe ser pronta y cumplida (C.P., Arts. 29 y 228; Ley 270 de 1996, Art. 4º) y que, aunque estas disposiciones no determinan los términos en que deben darse las actuaciones o proferirse las decisiones, la jurisprudencia constitucional, atendiendo a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene definido que estando comprometida la libertad personal dichas actuaciones y decisiones deben proferirse dentro de plazos razonables, *“atendiendo a las circunstancias del caso, y a la existencia de un verdadero interés público que justifique la restricción del derecho a la libertad personal, sin llegar en ningún caso al extremo de desconocerlo.*

“es un deber ineludible de las autoridades judiciales en cada caso, evitar que la medida se prolongue más allá de un lapso razonable (..)”, habida cuenta que **“se debe insistir en que la finalidad de la detención no es remplazar el término de la pena, y que la posibilidad del cómputo previsto en la ley, no genera el poder para la autoridad judicial de disponer de la libertad del sindicado hasta que se cumpla el tiempo que dura la pena, ya que de admitirse esa circunstancia, se vulneraría flagrantemente la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que se cumpliría anticipadamente una sanción sin haberse**

9

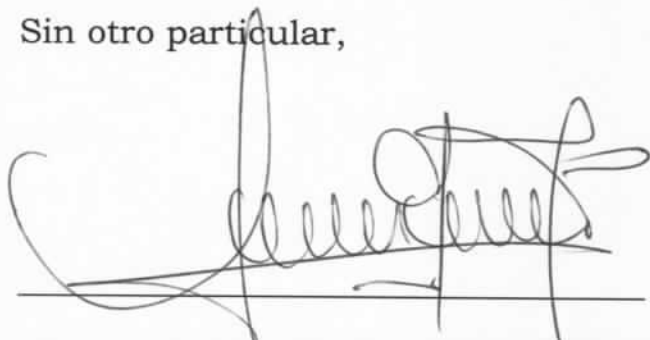
declarado judicialmente la culpabilidad del sindicato” y una vez, purgada la pena, la consecuencia ipso facto es la libertad.

De lo anterior, ruego sea tenido en cuenta dentro de las 36 horas que exige la norma legal, para resolver.

NOTIFICACIONES

Las recibiré en la Carrera 7 No. 17-51 Oficina 405 de Bogotá, Celular 3114772284 - 3209014748, Correo electrónico andreagf74@hotmail.com.

Sin otro particular,



CLAUDIA ANDREA GONZALEZ FEO

C.C. 52.179.064 de Bogotá

T.P. 218.243 del C. S. de la Judicatura



ADOLFO GIOVANNY CASTRILLON MURILLO

C.C. No. 15.961.705



cellos



